

Señores,

JUZGADO PRIMERO (1º) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co / adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co

ASUNTO: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 1ª INSTANCIA
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTES: ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS Y OTROS
DEMANDADOS: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
LL. EN GARANTÍA: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A Y OTROS
RADICACIÓN: 76001-33-33-001-2023-00294-00

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de la compañía **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, manifiesto que **REASUMO** el poder a mi conferido y encontrándome dentro del término legal, presento los respectivos **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA** dentro del proceso de la referencia, solicitando desde ya que se profiera **SENTENCIA FAVORABLE PARA MI REPRESENTADA**, desestimando las pretensiones de la parte actora y declarando probadas las excepciones propuestas al momento de contestar la demanda y el llamamiento en garantía.

I. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR ALEGATOS

Mediante Auto de Sustanciación proferido el 27 de mayo de 2025, notificado por estrados en la misma fecha, el Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Cali resolvió lo siguiente:

“En razón a que no existen más pruebas por practicar, atendiendo lo dispuesto por el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 se considera innecesario llevar a cabo la audiencia de alegaciones y juzgamiento de que trata el artículo 182 ibidem y en consecuencia **se ordena la presentación por escrito de los alegatos de conclusión, dentro de los diez (10) días siguientes a la presente audiencia.** Dentro de la misma oportunidad podrá la señora Agente del Ministerio Público emitir concepto si a bien lo tiene. (negritas y subrayado fuera del texto original).

En ese sentido, los diez (10) días de traslado para alegar de conclusión transcurrieron de la siguiente forma: **28, 29 y 30 de mayo y 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 11 de junio de 2025**. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los alegatos de conclusión del proceso de la referencia de manera oportuna dentro del término legalmente conferido.

II. PROBLEMA JURÍDICO

El Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Cali, en audiencia inicial del veinte (20) de febrero del año dos mil veinticinco (2025), fijó el litigio dentro del asunto *sub judice* de la siguiente manera:

“El litigio consiste en determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Distrito Especial de Santiago de Cali por los perjuicios ocasionados a los demandantes en razón de las lesiones padecidas por ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS en accidente de tránsito ocurrido el día 12 de abril de 2023 sobre la calle 16 entre carreras 79 y 80 en sentido sur norte, cuando perdió el control de la motocicleta de placas HSR-20D que conducía como consecuencia de un hueco que se encontraba sin señalización.

Conforme con lo anterior, deberá establecerse si el daño es imputable a la demandada como

consecuencia en una falla en la prestación del servicio de mantenimiento y señalización vial; o si por el contrario no existe un nexo causal entre el daño alegado y la conducta de la entidad accionada.

En el evento en que se advierta la responsabilidad entidad territorial demandada se deberá establecer la procedencia de los perjuicios y el monto de la indemnización reclamada con la demanda, así como la obligación de los llamados en garantía respecto de la condena”.

No sobra advertir que la fijación del litigio no se convierte en un obstáculo para el juez al analizar y resolver otros asuntos sometidos a su conocimiento dentro del proceso, así como la declaración de las excepciones que aparezcan probadas dentro del asunto.

Lo anterior en razón de los mandatos contenidos en los artículos 281 del Código General del Proceso y 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los cuales exigen al fallador resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento con el fin de que sus decisiones se enmarquen en el principio de congruencia:

“Código General del Proceso. Artículo 281. Congruencias. **La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (...)**”

“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. [...]” (negritas y subrayado fuera del texto original).

De esta forma, se advierte desde ya que las pretensiones del demandante y los problemas jurídicos planteados por el despacho deben ser resueltos de manera negativa, es decir, no le asiste ningún tipo de responsabilidad al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI y, por ende, mi representada, CHUBB SEGUROSS COLOMBIA S.A., no debe asumir ningún pago por el supuesto daño que de manera injustificada se le pretende endilgar al extremo pasivo de esta *litis*, por las siguientes razones:

III. TESIS DE CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Las tesis que sostendrá CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., a lo largo de los presentes alegatos de conclusión es que la parte actora no probó los elementos y presupuestos necesarios de la responsabilidad extracontractual de la demandada. Lo anterior debido a que no se acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar del presunto accidente de tránsito expuesto por la parte actora, ni la existencia de un nexo causal entre el daño alegado y una conducta imputable al Distrito Especial de Santiago de Cali, por lo que no es posible predicar la responsabilidad de la entidad demandada. Adicionalmente, la señora Elena Patricia Acevedo Rivas se encontraba ejerciendo una actividad peligrosa, no obstante no acreditó diligencia y cuidado y que efectivamente una causa extraña y externa a ella fue la causa eficiente del daño, pues por el contrario, de haber ocurrido los hechos señalados en la demanda, estas se ocasionaron por causas imputables directamente a la víctima Elena Patricia Acevedo Rivas, toda vez que incumplió las normas de tránsito al transitar en un vehículo tipo motocicleta por el carril izquierdo de la vía y sin contar con licencia de conducción, situaciones exoneran de todo tipo de responsabilidad a la entidad demandada. Finalmente, no se acreditó la existencia y monto de los perjuicios materiales e inmateriales solicitados por los

demandantes, así como tampoco la legitimación en la causa por activa del señor Juan Esteban Gómez Acevedo.

En subsidio de lo anterior, y en el remoto e hipotético caso de que el despacho acceda a las infundadas pretensiones de la demanda, la tesis que sostendrá CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., frente a su vinculación como llamada en garantía, es que al momento de proferir sentencia, el despacho debe tener en cuenta las condiciones generales y particulares de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507223000670, con vigencia del 1 de marzo de 2023 hasta el 16 de noviembre de 2023, tales como la inexistencia de pretensiones por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali frente a mi representada; las causales de exclusión de la Póliza en comento; y sin perjuicio de lo anterior, la inexistencia de la obligación indemnizatoria a cargo de la compañía aseguradora al no realizarse el riesgo asegurado en la póliza; el límite del valor asegurado en la póliza; el porcentaje de participación de mi representada en el coaseguro pactado en la póliza; la inexistencia de solidaridad entre coaseguradoras ni entre el demandado y la aseguradora; existencia de un deducible pactado en la póliza de responsabilidad civil extracontractual; la disponibilidad del valor asegurado; el carácter meramente indemnizatorio de los contratos de seguros y el pago por reembolso.

IV. DESARROLLO DE LAS TESIS EXPUESTAS POR CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A – LO PROBADADO EN EL PROCESO

1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE JUAN STEBAN GÓMEZ ACEVEDO

Es preciso advertir al despacho que no se acreditó la calidad con la que comparecía el señor Juan Steban Gómez Acevedo al proceso, ya que no se demostró su parentesco con la señora Elena Patricia Acevedo Rivas, así como tampoco que se trate de un tercero afectado por los hechos que se demandan, pues al proceso no se allegaron pruebas documentales o testimoniales que respalden esta situación.

Si bien el los demandantes Elena Patricia Acevedo Rivas (víctima), Germán Giraldo Orozco (cónyuge) y Juan Steban Gómez Acevedo rindieron declaración de parte en audiencia de pruebas de fecha 27 de mayo de 2025, lo manifestado por aquellos demandantes frente al presunto parentesco entre este último y Elena Patricia Acevedo Rivas o los perjuicios causados a Juan Steban Gómez Acevedo por los hechos que se demandan, no puede ser considerados para entender acreditadas estas circunstancias, por cuanto la demostración de la ocurrencia de estos hechos no puede derivarse de las meras afirmaciones de las partes.

Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión de los artículos 211 y 306 de la ley 1437 de 2011, que expresa que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y conforme a esta norma, entonces, quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia para que produzca el efecto pretendido, ya que la sola afirmación de una parte no es suficiente para acreditarlo.

“Más allá de las discusiones sobre el valor probatorio de la declaración de parte, la posibilidad de que esta prueba sea solicitada por la misma parte y la valoración de la misma, es claro que la demostración de la ocurrencia de los hechos no deriva de las afirmaciones de las partes. De ser así, la demanda y la contestación servirían para acreditar los supuestos de hecho que estas aducen y no sería necesaria la práctica de pruebas. Por ello, el Despacho

debe determinar, además, si la prueba es útil, pertinente, conducente y no resulta superflua.”¹
(Negrillas y subrayado fuera de texto)

En ese sentido, es claro que frente al señor Juan Steban Gómez Acevedo se configura la falta de legitimación por activa expuesta por mi representada en el escrito de contestación a la demanda y al llamamiento en garantía, por lo que solicito su declaración al momento de proferir sentencia.

2. FRENTE A LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

2.1 SE PROBÓ LA INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL

Los demandantes señalan que el 12 de abril de 2023, aproximadamente a las 20:20 horas, la señora Elena Acevedo tuvo un accidente de tránsito cuando transitaba en su motocicleta de placas HSR20D por la Calle 16 entre Carrera 79 y 80 en sentido sur - norte de la ciudad de Cali, y producto del accidente, fue trasladada a la Unidad Médico Quirúrgica Santa Clara IPS S.A.S. donde le diagnosticaron “*contusión de otras partes de la muñeca y la mano, traumatismo superficial de la cabeza, fractura de la epífisis interior del radio, entre otras*”. La parte actora atribuyó el accidente a la presencia de un hueco que se encontraba en la vía y la falta de señalización, por lo que consideraba que el Distrito Especial de Santiago de Cali debía responder por los perjuicios causados, pues consideraba que incumplió sus deberes de velar por la seguridad de la vía pública en la cual se produjo el accidente.

No obstante, tras revisar detenidamente el acervo probatorio se observa que la parte demandante no acreditó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que supuestamente resultó lesionada el día 12 de abril de 2023, ni mucho menos que haya sido a consecuencia de un hueco en la vía, toda vez que el contenido de las pruebas aportadas con la demanda y recaudadas en el proceso no permiten evidenciar en manera alguna esta situación, lo que impide establecer un nexo de causalidad entre la actuación de la administración y el daño reclamado.

Esto debido a que, si bien la parte actora aportó historias clínicas donde se observa que el día 12 de abril de 2023 ingresó a la Unidad Médico Quirúrgica Santa Clara IPS S.A.S con motivo de consulta “*accidente de tránsito*” y con unos diagnósticos de ingreso y egreso definidos como “*contusión de otras partes de la muñeca y la mano, traumatismo superficial de la cabeza y fractura de la epífisis interior del radio*”, lo cierto es que en relación con las circunstancias del accidente, únicamente obra en el expediente el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001526299, realizado el 13 de abril de 2023 por el Agente Diego Fernando Loaiza, el cual contiene una hipótesis del accidente con la causal # 306 “hueco en la vía”.

Sin embargo, frente al valor probatorio del Informe Policial de Accidentes de Tránsito, la postura jurisprudencial del Tribunal Administrativo del Valle ha sido pacífica, al indicar que este no acredita por sí solo la causa de un accidente, tal como se observa a continuación:

“Así entonces, **el informe policial de accidente de tránsito y su aclaración por sí solos no permiten determinar que el hueco en la vía haya sido la causa eficiente y única del daño;** las demás pruebas obrantes en el plenario como la historia clínica, los testimonios, los

¹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 17001-23-33-000-2020-00044-02(67820) **APCM**

dictámenes periciales de la Junta Regional de Calificación del Valle y del Instituto de Medicina Legal, analizados en conjunto no permiten a la Sala tener certeza acerca de cuál fue la causa eficiente del daño, específicamente determinar si el accidente se causó por la existencia de un hueco en la vía, o por la culpa exclusiva de la víctima, pues dichos elementos probatorios solo indican la ocurrencia del accidente, la causación del daño y de algunos perjuicios a los demandantes pero no el nexo causal”.² (Negrilla y subrayado fuera del texto).

“En este punto conveniente es precisar, **que la parte actora achaca como causa eficiente del accidente de tránsito ocurrido el 31 de mayo de 2015, a un hueco existente en la vía, soportando su aseveración en el referido informe de tránsito, sin embargo, no puede pasarse por alto que se trata de una hipótesis; luego dicho informe por sí solo no constituye prueba suficiente de dicha aseveración**, para ello se necesitaba de otras pruebas como las testimoniales, empero, los testimonios en este asunto solo rindieron declaración sobre las relaciones afectivas de la víctima con los demás demandantes”.³ (Negrilla y subrayado fuera del texto).

“Con lo anterior, logra la Sala colegir que efectivamente la señora Laura Marcela Moreno Abelardi padeció un accidente de tránsito el día 05 de octubre de 2017, mientras conducía su motocicleta por la altura de la carrera 56 con calle 12, cuando presuntamente cayó por culpa de unos huecos en la vía, que en el informe de accidente de tránsito y croquis suscrito por el funcionario que atendió la eventualidad, se dejó constancia de la existencia de huecos en la vía que transitaba la víctima, **no obstante, esta Corporación no puede determinar fehacientemente que la causa del daño haya sido el mal estado de la vía, esto es, la presencia de huecos en ella, toda vez que si bien se acreditó la existencia de los huecos, en el informe, mas no hay certeza de ello, máxime que no hubo testigo presencial de los hechos u otra prueba que pruebe que efectivamente fue la causa del accidente**”.⁴

“En este orden de ideas, se concluye que el informe policial de accidente de tránsito es un documento que: i) es susceptible de valoración judicial, ii) no constituye prueba pericial, sino documental cuya autenticidad se presume, pero admite prueba en contrario, **iii) no constituye prueba única y unívoca del accidente sino descriptiva de las condiciones halladas in situ, por lo cual su valoración debe ser conjunta con las demás pruebas y bajo las reglas de la sana crítica**”.⁵ (Negrilla y subrayado fuera del texto)

Lo anterior cobra sentido al considerar que las circunstancias ahí plasmadas tienen el carácter de una hipótesis estimada por el agente que diligencia el Informe, quien por regla general no presencia directamente el accidente, y por ende dicho Informe no puede ser considerado de manera aislada, como ha precisado el H. el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 12 de abril de 2024:

“Es importante precisar que **las hipótesis que se consignan en los correspondientes informes del accidente de tránsito aluden a una posible causa “estimada” por el agente de tránsito quien deduce la causa del evento a partir de lo observado en la escena del siniestro, mas no un hecho debidamente probado, dado que, en muchos casos, como en el presente, la autoridad de tránsito no presencia directamente el accidente, sino que arriba al lugar en un tiempo posterior a la ocurrencia de este**”.⁶ (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Esta circunstancia también fue reconocida en audiencia de pruebas celebrada el día 27 de mayo de 2025 por el Agente Diego Fernando Loaiza, quien suscribió el Informe Policial de Accidentes de Tránsito No. A001526299 y destacó que la hipótesis del accidente por él plasmada no es definitiva:

“**Apoderado Chubb Seguros Colombia S.A:** ¿Cuáles fueron los elementos técnicos que usted tuvo en cuenta para establecer la hipótesis que acaba de mencionarnos? **Testigo:** Trasladarme al sitio, verificar que efectivamente existe hueco sobre la vía, verificar los puntos de impacto de la motocicleta y colocar la cosa probable. **Apoderado Chubb Seguros Colombia S.A:** Si usted no presencié los hechos, ¿cómo pudo concluir que el motivo de la caída fue

2 Sentencia del 22 de agosto de 2019. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Zeranny Castillo Ojalora. Radicación No. 76001333301320140019801. Bogotá, D.C., 11 de Noviembre de 2019. Of. 210 Edificio 94º

3 Sentencia del 30 de julio de 2021. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Fernando Augusto García Muñoz. Radicación No. 76001333300620160009403. Cali - Av 6A Bis #35N-100, Of. 212

4 Sentencia del 30 de septiembre de 2022. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Juan Erik Chaves Bravo. Radicación No. 76001333300220190026301. Centro Empresarial Chipichape

5 Sentencia del 30 de mayo de 2025. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Juan Pablo Dossman Cortez. Radicación No. 76001-33-33-003-2017-00215-01

6 Sentencia del 12 de abril de 2024. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Freddy Ibarra Martínez. Radicación No. 19001333170120100035801 (59.914)

justamente ese hueco? Testigo: La persona, Elena Acevedo me dijo que se había accidentado en ese sitio y me dio 2 testigos, el cual coloqué en el informe accidente de tránsito. Le reitero, **yo coloco como agente de tránsito una causa probable del hecho, la causa definitiva la establece la señora Juez.**”

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el Informe Policial de Accidentes de Tránsito No. A001526299 no prueba por sí solo que la causa eficiente del accidente haya sido un hueco en la Calle 16 entre carrera 79 y 80 de la ciudad de Cali, por lo que no es suficiente para acreditar el nexo de causalidad requerido para declarar la responsabilidad por parte del Distrito de Santiago de Cali.

Sumado a lo anterior, la información ahí plasmada se encuentra desacreditada en el presente caso, por cuanto el Agente Diego Fernando Loaiza, quien suscribió el informe, no fue testigo presencial de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente, como consta en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito No. A001526299 y el Agente confirmó en la declaración rendida en el proceso:



“(…) **Juez:** ¿Conoce usted el motivo por el cual he citado a esta diligencia? **Testigo:** Sí, señora, por un accidente de tránsito que ocurrió el 12 de abril del año 2023. **Juez:** Levantó usted el Informe Policial del Accidente de Tránsito respectivo. Nos habla al respecto sobre este documento. **Testigo:** Sí, señora. **Ese informe lo elaboré yo el día 13 de abril, o sea, al otro día.** La central de tránsito me dice que llegue a la Clínica Santa Clara. Al llegar a la Clínica Santa Clara, observo una persona lesionada, camilla, de nombre Elena Acevedo, la cual me dice que tuvo un siniestro la noche anterior a eso de las 8:20 de la noche en la calle 16, entre carrera 79 y 80. Dice que tuvo unas lesiones entonces. Veo que la moto de ella está afuera. Le tomo fotos a la motocicleta, llamo una grúa para la inmovilización del mismo para que quede en cadena de custodia. Me dirijo al sitio de los hechos a tomar fotos, a hacer labor de vecindario. Tomo fotos del sitio, sí efectivamente hay un hueco. Acoto medidas, están registradas en el croquis o bosquejo. Y termino de diligenciar, no se le puede efectuar pruebas alicoramiento a la señora Luz Elena Acevedo, ya que el siniestro ocurre el 12 de abril de 2023 a las 8:00 de la noche y se atiende al otro día 13 a las 6:00 de la tarde. El vehículo quedó inmovilizado. La causa probable del accidente hueco en la vía.”

“(…) **Apoderado Chubb Seguros Colombia S.A:** Usted acaba de manifestar al despacho entre las preguntas de la señora juez que usted no presencié los hechos, confírmenos eso por favor. **Testigo:** Sí, efectivamente, **el siniestro ocurrió el 12 de abril y yo lo conocí el día 13 de abril.** (Se destaca)

En consecuencia, todo el contenido del informe está determinado por la narración de la misma víctima, desde la fecha, hora y lugar de los hechos, hasta la causa probable del accidente, como lo precisó el Agente en su declaración:

“(…) **Apoderado Chubb Seguros Colombia S.A.** ¿Cuáles fueron los elementos técnicos que usted tuvo en cuenta para establecer la hipótesis que acaba de mencionarnos? **Testigo:** Trasládarme al sitio, verificar que efectivamente existe hueco sobre la vía, verificar los puntos de impacto de la motocicleta y daba para colocar la causa probable que estimé. **Apoderado Chubb Seguros Colombia S.A:** Si usted no presencié los hechos, ¿cómo pudo concluir que el motivo de la caída fue justamente ese hueco? **Testigo:** La persona, Elena Acevedo me dijo que se había accidentado en ese sitio y me dio 2 testigos, el cual coloqué en el informe accidente de tránsito. Le reitero, yo coloco como agente de tránsito una causa probable del hecho, la causa definitiva la establece la señora Juez. (…)”

“(…) **Apoderado demandante:** Sírvase describir la posición final en la cual encontró la motocicleta de placas HSR20D. **Testigo:** No, no la encontré en posición final, ya que el siniestro ocurrió el 12 de abril y lo conocí el 13. La motocicleta estaba en la Clínica Santa Clara. (…)”

“(…) **Apoderada Distrito Especial de Santiago de Cali:** Según el IPAT y las respuestas que usted ha dado, la fecha de ocurrencia de los hechos fue el 12/04/2023, siendo las 20:20 y la fecha de levantamiento fue el 13 de abril. Dígame al despacho a qué día corresponden las

características del lugar y de la vía que están allí señaladas. **Testigo:** Al otro día, o sea, el siniestro corrió el 12 y yo lo atendí al otro día. Las características son tomadas al otro día. El día que fui a hacer labor de vecindario. (...)"

Juez: ¿Quién le dio la orden, porque fue? **Testigo:** Porque como autoridad de tránsito, uno tiene que ir a averiguar, hacer labor de vecindario, a ver si efectivamente ocurrieron los hechos, a mirar cómo es esa vía. Entonces, por eso fui a mirar la vía el otro día. **Juez:** ¿Cómo se enteró? ¿Quién le delegó o quién le informó del siniestro para que usted asumiera esta obligación legal? **Testigo:** La Central de tránsito. Muy seguramente la clínica llama al tránsito, dice, por favor, necesitamos un agente de tránsito en la clínica para que nos atienda un siniestro y pues yo llegué a la clínica, al escuchar la versión de la señora Elena Patricia Acevedo. Lógicamente no puedo quedarme ahí, sino que debo de dirigirme al sitio a ver si efectivamente puedo ver testigos. Ella me habló de 2 testigos y yo coloqué en el siniestro, pero yo fui al otro día y tomé lo que lo que hice, lo que encontré, la vía, las fotos y demás. **Juez:** ¿Con este se basó usted en la declaración de la víctima de la lesionada y los 2 testigos también usted los escuchó o no los escuchó? O simplemente anotó los nombres. **Testigo:** Simplemente anoté los nombres. **Juez:** No los encontró ni habló con ellos. **Testigo:** No señora. **Juez:** ¿Cómo base, entonces, para ir al sitio fue la declaración de la misma víctima? Testigo: Es correcto (...)"

"(...) **Apoderada Distrito Especial de Santiago de Cali.** En respuesta anterior, dijo que los huecos están en la parte izquierda, pero en las observaciones que dice el vehículo fue movido por auxiliar al lesionado por parte de paramédicos. El siniestro ocurre el día 12 de abril y se conoce el día 13 de abril, en la Clínica Santa Clara. ¿Usted cómo concluye que el vehículo iba, pues en determinado carril? **Testigo:** Todo lo que yo todo, te todo lo que coloco lo coloco con la versión de la señora Elena Acevedo. Por eso lo plasmo ahí, en el en el informe de accidente tránsito, pero son las cosas que ella me dice, y eso es lo que lo que coloco."

"(...) **Juez:** Quiere decir usted con esta respuesta que nos da que estos puntos de referencia del lugar del siniestro usted los colocó en el informe, pero 100% basado en la versión de la víctima, de la que tuvo el accidente de tránsito. **Testigo:** Ella me da la versión y yo al otro día voy y miro los huecos que efectivamente están en el carril izquierdo. Ella me habla de su trayectoria en ese carril y le tomo fotos al hueco, lo plasmo en el en el bosquejo y le tomo las medidas. **Juez:** Recuerda, por favor, el lugar específico del accidente, el que reportan el en el informe **Testigo:** La calle 16, entre carrera 79 y 80. El siniestro ocurre en el sobre la Calle 16, en el sentido sur - norte, sobre el carril izquierdo (...)" (Se destaca)

Visto lo anterior, se evidencia que en el presente caso no se encuentra acreditado mínimamente el lugar del accidente, pues el funcionario entrevistó a la señora Elena Acevedo en un lugar diferente al de los hechos, esto es la Clínica Santa Clara y fue ella quien le indicó la presunta dirección del accidente, por lo que si bien el agente posteriormente realiza una visita al punto señalado por la víctima y verifica la existencia de un hueco en la vía, esto de ninguna manera acredita la causa del accidente, ni tampoco que el hueco verificado por el Agente en la Calle 16 entre Carrera 79 y 80 de la ciudad de Cali, haya sido el que lo provocó.

Esto pues el Agente no contó con la versión de algún testigo u otro elemento que le permitiera concluir que el hueco ubicado en la Calle 16 entre Carrera 79 y 80 de la ciudad de Cali causó el accidente de la señora Elena, pues es más, la motocicleta no se encontraba en el lugar indicado, sino a las afueras de la Clínica donde la víctima estaba siendo atendida y no se contó otro indicio material que permitiera reconstruir de forma técnica o más precisa la dinámica del siniestro y el lugar donde tuvo ocurrencia, pues si bien se señala en el IPAT la existencia de huella de frenado y de arrastre, debe recordarse que esta información fue recaudada por el Agente hasta el día siguiente, en una vía en la que tanto la víctima directa como el Agente Diego Fernando Loaiza indicaron que era de alta accidentalidad y en ese sentido, nada permite establecer que se trate de señales provocadas con el accidente expuesto en la demanda.

En este punto cave advertir que las declaraciones rendidas por los demandantes Elena Patricia Acevedo Rivas (víctima), Germán Giraldo Orozco (cónyuge) y Juan Steban Gómez Acevedo en audiencia de pruebas celebrada el 27 de mayo de 2025 las circunstancias declaradas, no puede ser consideradas para

entender acreditados los hechos de la demanda, por cuanto la demostración de la ocurrencia de los hechos no puede derivarse de las meras afirmaciones de las partes. Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión de los artículos 211 y 306 de la ley 1437 de 2011, que expresa que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y conforme a esta norma, entonces, quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia para que produzca el efecto pretendido, ya que la sola afirmación de una parte no es suficiente para acreditarlo.

“Más allá de las discusiones sobre el valor probatorio de la declaración de parte, la posibilidad de que esta prueba sea solicitada por la misma parte y la valoración de la misma, es claro que la demostración de la ocurrencia de los hechos no deriva de las afirmaciones de las partes. De ser así, la demanda y la contestación servirían para acreditar los supuestos de hecho que estas aducen y no sería necesaria la práctica de pruebas. Por ello, el Despacho debe determinar, además, si la prueba es útil, pertinente, conducente y no resulta superflua.”⁷

En ese sentido, al no existir medio de prueba alguno que respalde la información contenida en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito No. A001526299 y al carecer este por sí mismo de contenido suasorio al estar diligenciado únicamente con base en la información proporcionada por la víctima directa, es claro que no se ha logrado determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente padecido por la señora Elena Acevedo, en especial la parte demandante no acreditó que el mismo ocurriera a consecuencia de un hueco en la vía ni mucho menos que se debiera a un hueco ubicado en la Calle 16 entre Carrera 79 y 80 de la ciudad de Cali, por lo que no es posible determinar un vínculo de conexidad que permita concluir que el accidente causante de lesiones realmente se produjo por la presencia de un hueco en la vía pública, debido a que tampoco existe prueba que permita establecer que las supuestas lesiones que registra la historia clínica aportada por la parte demandante sean producto de un accidente de tránsito, ni mucho menos que este haya sido provocado por un supuesto mal estado de la vía., no hay ningún elemento probatorio que permita concluir, con la fuerza de convicción necesaria, que esas dos condiciones se encuentran enlazadas en una situación de causa – efecto y de los cuales se infiera razonablemente la presencia de un vínculo de conexidad que permita concluir que el accidente causante de lesiones realmente se produjo por la presencia de un hueco en la vía pública y no por otra causa.

2.2 SE ACREDITÓ LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA COMO CAUSAL EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD

En el presente caso la parte actora pretendía atribuir la responsabilidad de la ocurrencia de un accidente a la entidad territorial de Santiago de Cali con fundamento en la supuesta inacción respecto del mantenimiento de la malla vial y la falta de señalización del sitio en que ocurrió el siniestro y para ello hizo eco de lo contenido en el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001526299, sin embargo, y sólo en el caso en que se decida darle pleno valor probatorio al informe, de dicho documento lo único que prueba este es que la víctima estaba conduciendo en contravía de las obligaciones de tránsito dispuestas para el tipo de automotor involucrado, esto es, la motocicleta de placas HSR20D, por cuanto en el interrogatorio de parte rendido en audiencia de pruebas celebrada el día 27 de mayo de 2025, la señora Elena Acevedo confesó que en el momento de los hechos no portaba licencia de conducción vigente y además se encontraba invadiendo el carril derecho, cuando el carril izquierdo es preferente para las motocicletas, sin que haya presentado una justificante válida que la llevara a cometer la infracción.

⁷CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C, Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 17001-23-33-000-2020-00044-02(67820) **APCM**

Cabe destacar en este punto que, si bien las declaraciones rendidas por los demandantes en audiencia de pruebas celebrada el 27 de mayo de 2025 no puede ser consideradas para entender acreditados los hechos de la demanda, por cuanto la demostración de la ocurrencia de los hechos no deriva de las afirmaciones de las partes, otra consecuencia se predica respecto a los hechos adversos al declarante y que favorezcan a la parte contraria, pues el artículo 191 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 211 de la ley 1437 de 2011, prevé que la declaración de parte podrá ser apreciada como confesión:

“El artículo 191 CGP, aplicable por remisión del artículo 211 CPACA, prevé que **la declaración de parte podrá ser apreciada como confesión, es decir, en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria** cuando reúna los siguientes requisitos: (i) que el confesante tenga capacidad y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; (ii) que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria; (iii) que recaiga sobre hechos frente a los cuales la ley no exija otro medio de prueba; (iv) que sea expresa, consciente y libre; (v) que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento y (vi) que se encuentre probada, cuando fuere extrajudicial o judicial trasladada.”⁸

Teniendo en cuenta lo anterior, en audiencia de pruebas celebrada el 27 de mayo de 2025 la demandante Elena Acevedo confesó los siguientes hechos:

“**Juez:** En el informe de tránsito nos manifiesta este informe o este documento de que iba usted por el carril izquierdo, ¿por qué motivo? **Demandante:** Porque en el momento de estar en el semáforo, de coger esa vía había como le digo, señora jueza, muchos carros y muchas motos, **y me fui quedando en la parte izquierda, me fui localizando en la moto, en la parte izquierda y ya se me dificultaba para extenderme hacia la parte derecha.** **Juez:** ¿Cuándo dice se le dificultaba es por qué? **Demandante:** Porque había mucha fluida de tráfico, sí, había muchos carros, muchas motos, entonces, pues ya me cogió en la parte izquierda y no cogí hacia otro lugar porque pues nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó. (...) **Juez:** ¿Tenía usted la licencia vencida? **Demandante:** No doctora, para nada, todos mis papeles en regla. **Juez:** De acuerdo a al informe de tránsito, allá aparece con licencia vencida y hoy tuvimos declaración del Agente y aparece la licencia vencida como tal. ¿Se sostiene usted en que estaban los papeles al día? (...) **Demandante:** Pues yo tenía seguro nuevo, casco nuevo, técnico mecánica nueva, pero doctora no, en este momento no participé del conocimiento de que mi licencia estuviera vencida. (...)”

“(…) **Apoderado SBS Seguros S.A.: En sus respuestas anteriores también nos dijo que usted transitó por el carril izquierdo porque había mucho tráfico, ¿es esto cierto?** (...) **Demandante:** Sí, había mucho tráfico. Ese día estaban arreglando las vías de la Simón y ahí en toda la 16, ahí en el semáforo entre Simón Bolívar y la 16, todos los carros se iban hacia la parte de la 16 porque había una construcción en la Simón Bolívar y pues yo tomé esa vía alterna. **Apoderado SBS Seguros S.A.: Solamente para aclararlo, entonces en la calle en la que ocurrió el accidente, es decir, la calle 16, entre carrera 79 y 80 había tráfico, pero no había como tal obras, ¿es así?** **Demandante:** No había obras. Tráfico, bastante tráfico. **Apoderado SBS Seguros S.A.:** (...) entonces, podríamos decir que la razón por la cual usted tomó el carril izquierdo fue solamente por tráfico, pero no había nada que le impidiera seguir por el carril derecho. **Demandante:** Yo siempre, como le digo, tomo el carril derecho, pero pues en el semáforo se fueron acomodando las motos de tal manera que luego, se llena la parte de donde está el semáforo, se llena de carros y de motos, quedo yo en esa parte, continúo, seguían las motos y los carros hacia adelante derecho y ya continúo yo mi camino, pero si sucedió así. **Apoderado SBS Seguros S.A.: Pero había algo como tal que impidiera que usted transitara por el carril derecho.** **Demandante:** No, simplemente ir colocando direccional a medida que iba avanzando e irme haciendo hacia la parte derecha, pero en ese entonces, pues como le digo, donde yo me accidente es muy cerca mi trabajo y pues no había alcanzado a tomar la parte derecha. **Apoderado SBS Seguros S.A.:** Si usted hubiera esperado en el carril derecho, hubiera podido continuar con su rumbo normal, digamos solamente con un poco más de lentitud por el tráfico. **Demandante:** Sí debí haberme ido orillando, como le digo, con el direccional hacia la parte derecha, pero pues fue muy corto el trayecto y no, no se dio en el lapso de donde pudieran darme el espacio para irme, haciendo la parte de la orilla no tuve espacio durante ese tiempo y pues no, no, no fui abordando la derecha

⁸ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 17001-23-33-000-2020-00044-02(67820) **APCM**

porque es que no, no veía cómo pasarme, había tantas motos y carros, no veía cómo pasarme hacia la parte derecha. **Apoderado SBS Seguros S.A.:** El Guardia de Tránsito, que declaró con anterioridad a usted nos dijo que usted fue la única persona que le brindó todos los datos de donde ocurrió el accidente y demás, ¿es esto cierto? **Demandante:** Si señor así es. (...)"

"(...) Apoderado Chubb Seguros Colombia. ¿Es consciente de que en el momento puntual en el que ocurrieron los hechos usted se encontraba incumpliendo 2 normas de tránsito, al menos? Demandante: Sí, doctor, así es, pero en el momento que no llevaba la derecha, iban muchas motos y carros en esa misma situación, no solamente yo iban por afluencia de carros y motos íbamos muchas personas en esa dirección, es que era demasiado de carros y motos, y pues no, solamente mi persona presente llevaba esa situación, yo era consciente de que tenía que orillarme, pero no vi la situación para hacerlo. Apoderado Chubb Seguros Colombia: Digamos que eso podría ser el motivo por el del carril. **¿Y cuál es el motivo para no tener vigente la licencia de tránsito? Demandante: Sí, bueno, lo de la licencia de conducción sí fue un error humano,** la verdad no me había percatado de tener la licencia vencida, la licencia es una de las cosas que uno poco guarda en su en su cartera. Siempre los tiene presentes, pero no me había dado humanamente por mirar la fecha de vencimiento a mi documento."

Además de la confesión de la víctima directa, desde la contestación a la demanda y al llamamiento en garantía se puso de presente que el IPAT utilizado para pretender endilga la responsabilidad de la demandada, indica en su contenido que la señora Elena Patricia Acevedo Rivas no portaba una licencia de conducción vigente, ya que para el 12 de abril de 2023 su licencia se encontraba vencida, de hecho, había vencido desde el 31 de enero de 2022, es decir, llevaba aproximadamente dos meses y medio sin licencia, observemos:

Licencia(s) de conducción					
Nro. licencia	OT Expide Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones	Detalles
67042294	STRIA TTOyTTE MCPAL CANDELARIA	12/07/2023	ACTIVA	CONDUCCION CON LENTES	Ver Detalle
Categorías de la licencia Nro: 67042294					
Categoría	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Categoría antigua		
A2	12/07/2023	12/07/2033			
8881928	STRIA TTOyTTE MCPAL ORITO	31/01/2012	VENCIDA		Ver Detalle
Categorías de la licencia Nro: 8881928					
Categoría	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Categoría antigua		
A2	31/01/2012	31/01/2022			

Por lo anterior, es claro que estamos hablando de una situación inequívoca en la que la decisión voluntaria e irresponsable de la víctima la puso a adelantar una actividad que por naturaleza es riesgosa sin que se acreditara que estaba capacitada para hacerlo, es decir, de la ausencia de licencia de conducción por parte de la víctima surgen distintos interrogantes, todos ellos relacionados con la adecuada pericia y conocimiento de las normas de tránsito exigibles a quien opera un vehículo. Esto resulta particularmente relevante si se tiene en cuenta que, según lo consignado en el IPAT, la demandante se desplazaba por una vía urbana, donde los límites de velocidad son inferiores, no obstante, indica que no pudo esquivar un hueco en la vía que era evitable si se cumplía con la norma de velocidad en este tipo de carreteras, de conformidad con lo señalado por el Agente Diego Fernando Loaiza:

"(...) Apoderada de Mapfre Seguros Generales S.A.: Usted ha informado al despacho que al día siguiente se dirigió al lugar de los hechos y refirió en respuesta anterior que la iluminación era buena, teniendo en cuenta que usted fue al lugar, el hueco era visible para las personas que pudieran ir transitando por la vía. **Testigo:** El hueco bastante visible, está bastante grande la verdad. De pronto, si usted va detrás de un vehículo y luego el encuentra, puede tener un siniestro como efectivamente la señora Elena lo tuvo. **Apoderada de Mapfre Seguros Generales S.A** ¿Entonces, señor Diego, usted considera, de acuerdo con su experiencia, que ir a una velocidad baja, se puede hacer alguna maniobra para esquivar ese hueco? **Testigo:** Claro

que sí.

Aunado a ello se debe tener en cuenta que, según el IPAT, el hecho se presentó en una zona considerada como “Residencial”, por lo que, atendiendo a las estipulaciones del Código Nacional de Tránsito, el límite máximo para circular en este tipo de zonas es de 30 km/h, sumado al hecho de que por la hora en que presuntamente se presentó el suceso, la velocidad se debía disminuir aún más, por lo que a una conducción menor a 30 km/h, era posible, y debió ser posible esquivar el supuesto hueco.

En esa medida, no puede descartarse que el accidente haya tenido origen en una maniobra inadecuada o en una reacción impropia ante un elemento sorpresivo en la vía, atribuible a la falta de idoneidad del conductor o el conocimiento de las normas de tránsito, pues no debe olvidarse que la conductora transitaba por el carril izquierdo de la vía, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito, que obliga a los conductores de motocicletas a transitar por la derecha de la vía, a una distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla, incumplimiento que modifica las condiciones en que normalmente se produciría un tránsito seguro y contribuye a reforzar que el accidente tuvo como causa la culpa exclusiva de la víctima al estar influenciado por el actuar imprudente e inexperta de la propia conductora:

ARTÍCULO 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de bicicletas, triciclos, **motocicletas**, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En este contexto, es claro que nos encontramos ante evidentes incumplimientos de las normas de tránsito por parte de la víctima, situación que es determinante para que se produzca el resultado dañoso, y en tal sentido nos encontramos ante la configuración de los elementos propios de la figura de culpa exclusiva de la víctima, pues además, cabe recordar que la señora Elena Acevedo estaba desempeñando una actividad peligrosa y como tal, debe demostrar no sólo diligencia y cuidado, sino que efectivamente una causa extraña y externa a ella fue la causa eficiente del daño, circunstancia que no se probó en el presente caso.

En consecuencia, al respecto se debe hacer referencia a lo que el Consejo de Estado en su Sección Tercera, mediante sentencia del 25 de julio de 2002 (expediente 13.744), ha dicho al referirse sobre la culpa de la víctima:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. **Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor ..., quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)**” (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Bajo esta perspectiva, es menester indicar que la demandante al circular incumpliendo las normas de

tránsito especiales y particulares para el tipo de vehículo que conducía, se expuso completamente al riesgo, en el entendido de que renunció a su propia seguridad y confió en sortear de manera imprudente la actividad peligrosa de conducir, a pesar de tener la obligación de conocer que no debía conducir el vehículo sin licencia de conducir, sin exceder el límite máximo de velocidad establecido para su vehículo y por un carril por el cual no le correspondía desplazarse, situaciones que fueron establecidas para que su integridad como conductora se vea lo menos comprometida en un escenario de riesgo latente como lo es la conducción de vehículos.

Sobre este último particular, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo- Consejero Ponente: Juan De Dios Montes Hernández, en sentencia del 09 de diciembre de 1996, proferida dentro del expediente con radicado No. 9722, indicó lo siguiente:

“Quien conduce debe prever que aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico puede ser evitado con su contribución activa; más allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor”. (Negrillas fuera del texto original)

Aquí brilló por su ausencia, para el momento del hecho, el ejercicio de actitud síquica de la conductora de la motocicleta, como quiera que, al ya inherente riesgo de conducir, le añadió por voluntad propia la conducta aún más riesgosa de hacerlo sin prever las normas de tránsito, y en tal sentido exponerse a que ello le llevara a un desenlace como el que alega le terminó ocurriendo. En suma, es contundente que no hubo una contribución activa de su parte con miras a evitar la ocurrencia del daño, dado que no cumplió sus obligaciones para ejercer la actividad peligrosa de conducir y por el contrario su actitud imprudente le expuso a una situación de la que terminó desencadenando la situación dañosa que nos ocupa.

En tal contexto entonces es procedente concluir que las lesiones que manifiesta haber sufrido la señora Elena Acevedo, son un claro ejemplo de dejar al azar su seguridad y no adoptar las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes, y bajo esta premisa, es claro que la causa eficiente del daño no corresponde ni puede ser atribuida a la falla en el servicio alegada, sino a una falta de cumplimiento de deberes legales y a la falta de precaución en el deber objetivo de cuidado, pues de haberse adoptado las medidas de seguridad antes indicadas las cuales revisten las características de ser obligatorias cuando de asuntos de tránsito se trata, el hecho dañoso objeto de litigio no se hubiera configurado. En este sentido, al acreditarse una culpa exclusiva de la víctima, no es posible conceder una declaratoria de la responsabilidad, por lo que, solicito al señor Juez declarar probada este alegato.

2.3 SUBSIDIARIO: REDUCCIÓN DE LA EVENTUAL INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DEL DEMANDANTE EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO / CONCURRENCIA DE CULPAS

Sin perjuicio de lo anterior, sin que implique reconocimiento de la responsabilidad, en el remoto caso que el despacho considere que la parte actora demostró los elementos que constituyen la responsabilidad en cabeza del Distrito de Santiago de Cali, deberá aplicarse la respectiva reducción de la indemnización en proporción a la contribución de la señora Elena Patricia Acevedo Rivas en el accidente, quien incumplió las normas de tránsito al i) conducir por el carril incorrecto, ii) conducir sin licencia de conducción y iii) conducir a una velocidad mayor de 30 km/h, la cual, no estaba permitida para las zonas residenciales, circunstancias que permitieron que se concretara el daño que hoy alega la parte actora. Al respecto, el Consejo de Estado ha establecido:

“De ahí que, la autoridad judicial demandada se encontraba habilitada para estudiar si se

configuraba alguno de los eximentes de responsabilidad, entre los que se encuentra, el hecho de la víctima, como efectivamente lo hizo. Por ello, al encontrar que la actuación de la víctima directa concurrió en la producción del daño, decidió reducir el valor de la indemnización. De modo que, contrario a lo alegado por el actor, el juez de segunda instancia no desbordó el marco de su competencia y tampoco incurrió en el defecto sustantivo alegado”.⁹ (Negrilla y subrayado fuera de texto)

En distinto pronunciamiento, la misma corporación manifestó que en el caso en que la negligencia de la víctima incida para que se exponga imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización. Lo anterior fue manifestado en un caso en el que se evidenció la culpa de la víctima en la ocurrencia del daño, estimada en una proporción del 50% de los perjuicios:

“Todo ello, en pos de la responsabilidad que por el riesgo creado debe afrontar la entidad demandada —Fiscalía General de la Nación— implica que, en merecimiento de la culpa evidenciada de la víctima, se debe efectuar una reducción en la condena, la cual se estima, por el nivel de incidencia de la negligencia de los demandantes —propietarios de edificio donde funcionaba el centro comercial—, **equivalente al 50% de los perjuicios que lleguen a probarse y concederse en favor de estas personas, ya que del mismo tenor del riesgo que reclaman, fue la imprudencia de los demandantes en la no evitación del daño.**”¹⁰ (Negrilla y subrayado fuera de texto)

En este sentido, en el caso citado el juez encontró probada la incidencia de la víctima en la causa generadora del daño en proporción a un 50% y en ese sentido redujo los perjuicios que se probaron en el proceso en el mismo porcentaje, como quiera que la responsabilidad del demandado resultó menguada por la participación determinante de la víctima en la ocurrencia del suceso. Siendo así, que queda claro que el despacho debe considerar las circunstancias en las que se produce el daño, así como sus condiciones de modo, tiempo y lugar, a fin de determinar la incidencia causal de la conducta de la víctima en la ocurrencia del daño.

En consecuencia, al encontrarse acreditado con las pruebas que obran en el expediente que la señora Elena Patricia Acevedo Rivas tuvo incidencia determinante y significativa en la ocurrencia del accidente de tránsito del 12 de abril de 2023, en subsidio a la solicitud de declaración de la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, deberá declararse que el porcentaje de la causación del daño es del 50%, en cuanto su actuar fue imprudente al decidir conducir por el carril incorrecto, conducir sin licencia de conducción y a una velocidad mayor de 30 km/h, la cual, no estaba permitida para las zonas residenciales, circunstancias que permitieron que se concretara el daño que hoy alega la parte actora, de manera que, de no eximir de responsabilidad a la entidad demandada, deberá ser objeto de valoración para que se reduzca la remota condena en contra de ella.

2.4 FALTA DE ACREDITACIÓN PROBATORIA DE LOS PERJUICIOS Y EXAGERADA TASACIÓN DE LOS MISMOS

La parte demandante no demostró la existencia de los perjuicios materiales e inmateriales que solicita, los cuales, además, se encuentran tasados de manera exagerada en la demanda, como pasa a exponerse

Frente al **perjuicio de lucro cesante consolidado y futuro**, la parte demandante pretende su reconocimiento por un valor de \$98.146.029, manifestando que la señora Elena Patricia Acevedo Rivas se desempeñaba como asesora integral de la empresa Falabella y que devengaba un salario de \$ 1.160.000. Sin embargo, salta a la vista que esta cuantía carece de una liquidación objetiva y no fue acreditada en el

9 Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P. Milton Chaves García, Radicación No. 2018-03357

10 Sentencia del 24 de enero de 2019. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Radicación No. 43112.

asunto. Como pasa a exponerse:

Frente al lucro cesante consolidado, en la demanda se indicó que a víctima estuvo incapacitada, desde el día 12 de abril de 2023 hasta el día 10 de junio del 2023 y desde el 12 de julio de 2023 hasta el día 10 de agosto del 2023 para un total de 3 meses en los que dejó de percibir ingresos, a los que le suma 24 meses transcurridos hasta la fecha estimada de la sentencia. Frente al cálculo de lucro cesante futuro, indica que la expectativa de vida de la víctima es de “559,2 meses”. Aunado a ello se indica que se realiza la estimación de los valores, pero sobre el supuesto de una pérdida de capacidad laboral del 30%.

Sin embargo, dentro del proceso la empresa Falabella de Colombia S.A certificó mediante oficio del 20 de mayo de 2025, que la señora Elena Acevedo laboró para la compañía desde el 08 de julio de 2017 hasta el 02 de marzo de 2024, y el último cargo desempeñado fue asesor integral en una jornada 36 horas con un ingreso mensual de \$995.744, y además, aportó planillas de pago de seguridad social hasta la fecha de su retiro, donde se evidencia que percibió ingresos de manera continua hasta su renuncia el día 02 de marzo de 2024. Por otra parte, obra en el proceso Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral No. 16202403249 proferido el 07 de junio de 2024, la actora fue calificada con una PCL del 10.76%.

En este sentido, es necesario recordar que el perjuicio del lucro cesante ha sido entendido como uno de naturaleza material, económico, de contenido pecuniario y que consiste en la afectación de un derecho patrimonial reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir a causa del daño padecido. Por lo anterior, para que sea posible el reconocimiento del perjuicio de naturaleza económica, es necesario que se acredite su existencia cierta, actual o futura mediante elementos de convicción que permitan determinar el valor dejado de percibir. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“(…) En cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. Ahora, sin ahondar en la materia, porque no es del caso hacerlo, esa certidumbre no se opone a que, en determinados eventos, v. gr. lucro cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual cualquier elucubración ha de tener como punto de partida una situación concreta, tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesión del interés jurídicamente tutelado (…)

Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinsa en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (…)

Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables.”¹¹

Sin embargo, en el presente asunto no se encuentra acreditada la afectación reclamada, pues como se evidenció por la compañía Falabella, la señora Elena Acevedo laboró para la compañía hasta el 02 de marzo de 2024, es decir pasado casi un año desde la ocurrencia del accidente el día 12 de abril de 2023, tiempo durante el cual percibió ingresos de manera continua hasta su renuncia el día 02 de marzo de 2024, la cual, cabe señalar, fue provocada por factores externos a los hechos debatidos, como lo manifestó la demandante en su declaración el día 27 de mayo de 2025, pues llegó a tal determinación debido a que no estaba conforme con las funciones que le impuso el empleador. Así mismo, en su declaración indicó que actualmente realiza labores por prestación de servicios:

“**Juez:** ¿Cuándo fue la fecha en que en que terminó el vínculo laboral con Falabella?
Demandante: Yo terminé vínculo laboral con Falabella el día 28/02/2023 doctora. **Juez:** ¿Y el motivo? **Demandante:** **Porque sentía que todas las labores que me mandaban hacer eran muy fuertes para mí** y no sentía consideración debido a mi situación. Empecé a notar que los inventarios eran elevados de mucho peso. Como le digo, tenía que hacer elevaciones y bajar cajas muy altas de las bodegas y pues me dolía y no sentía como como apoyo. Entonces empecé

¹¹ Sentencia del 24 de junio de 2008. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente SC 2000-01121-01.

a evidenciar que no, no podía más, que tenía que buscar otra alternativa, pues para mejorar. **Juez** ¿En este momento se desempeñan usted en labores del hogar? ¿Está dedicada a la casa?? **Demandante:** En este momento yo trabajo por prestación de servicio en algunas partes solo por prestación de servicio, pero sí estoy ahora en casa.”

En ese sentido, la parte demandante no acreditó la afectación de un derecho patrimonial reflejada en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir a causa del daño padecido, pues por el contrario, se evidenció que laboró para la compañía Falabella hasta el 02 de marzo de 2024, es decir pasado casi un año desde la ocurrencia del accidente el día 12 de abril de 2023, tiempo durante el cual percibió ingresos de manera continua hasta su renuncia, y a día de hoy continúa ejerciendo una actividad económica por prestación de servicios, motivo por el cual dicha pretensión debe ser desestimada.

En segundo lugar, frente a los **perjuicios morales**, a parte actora solicitó a título de indemnización por los perjuicios morales la suma de 60 SMLMV para cada demandante.

Sin embargo, no aportaron al proceso prueba alguna que acredite su causación y, además, de dicha pretensión debe afirmarse que su tasación no puede derivarse de calificaciones subjetivas por parte de los demandantes, sino que debe basarse en factores objetivos como la gravedad de la lesión sufrida, tal como lo ha determinado el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014.

En este sentido, la parte actora está solicitando como indemnización por concepto de perjuicios morales el tope máximo cuando la lesión presenta una gravedad igual o superior al 30% e inferior al 40%, cuando de conformidad con el Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral No. 16202403249 proferido el 07 de junio de 2024, la actora fue calificada con una PCL del 10.76%. Además, solicita el mismo monto para todos los demandantes cuando la jurisprudencia referida indica que para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado.

Por lo anterior, no es procedente que se conceda ninguna indemnización a título de perjuicios morales para ninguno de los demandantes, en especial, no es procedente reconocer el perjuicio de daño moral al señor Juan Steban Gómez Acevedo en cuanto no se acreditó la calidad con la cual comparece a este proceso, como se indicó al inicio de la este escrito, pues bien el los demandantes Elena Patricia Acevedo Rivas (víctima), Germán Giraldo Orozco (cónyuge) y Juan Steban Gómez Acevedo rindieron declaración de parte en audiencia de pruebas de fecha 27 de mayo de 2025, lo manifestado por aquellos demandante frente al presunto parentesco entre Juan Steban Gómez Acevedo y Elena Patricia Acevedo Rivas o los perjuicios causados al primero por los hechos que se demandan, no puede ser considerados para entender acreditadas estas circunstancias, por cuanto la demostración de la ocurrencia de los hechos no puede derivarse de las meras afirmaciones de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión de los artículos 211 y 306 de la ley 1437 de 2011.

Frente al **perjuicio a la salud**, la parte actora solicita a título de indemnización por el perjuicio del daño a la salud a la víctima directa la suma de 60 SMMLV, sin aportar ningún elemento objetivo que permita su tasación, por lo que termina siendo meras especulaciones y expectativas sin sustento probatorio.

Frente al daño a la salud, el Consejo de Estado en Sentencia del 3 de abril de 2020, radicación 05001-23-31-000-2011-00421-01 (49426), explicó que existen dos componentes del perjuicio derivado del daño a la salud, estos son: i) un componente objetivo (la gravedad de la lesión padecida) que se establece con el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo (la naturaleza de la lesión padecida) que permite incrementar, según la regla de excepción, el valor reconocido en el componente objetivo.

Así mismo, el H. Consejo de Estado en la citada Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, estableció que para su indemnización deberá tenerse en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, para lo cual establece a modo de orientación los siguientes valores: Igual o superior al 50%, se reconocerá hasta 100 SMMLV; Igual o superior al 40% e inferior al 50% se reconocerá hasta 80 SMMLV; Igual o superior al 30% e inferior al 40% se reconocerá hasta 60 SMMLV; Igual o superior al 20% e inferior al 30% se reconocerá hasta 40 SMMLV e igual o superior al 10% e inferior al 20% se reconocerá hasta 20 SMMLV; Igual o superior al 1% e inferior al 10%, se reconocerá hasta 10 SMMLV.

En este sentido, hay que llamar la atención que, para el caso concreto, de conformidad con el Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral No. 16202403249 proferido el 07 de junio de 2024, la actora fue calificada con una PCL del 10.76%, sin que se haya establecido una circunstancia de mayor gravedad de la lesión padecida, lo que hace improcedente el reconocimiento solicitado en la demanda.

Frente al **perjuicio a la vida de relación**, la parte actora solicita el reconocimiento de 60 SMLMV para cada demandante, sin embargo, el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha determinado que este perjuicio se encuentra subsumido en el daño a la salud, por lo que, no hay lugar a reconocer esta indemnización de manera autónoma, sino incluida en el perjuicio ya mencionado. Así mismo, el daño a la salud es reconocido únicamente a la víctima directa y no a sus familiares, por lo que, se sostiene lo referido con anterioridad para este perjuicio y frente a los señores Germán Giraldo Orozco, Jhon Sebastián Giraldo Acevedo y Luciana Giraldo Acevedo se afirma que no es procedente la indemnización del daño a la salud en cuanto no tiene la calidad de víctimas directas, y frente al señor Juan Steban Gómez Acevedo no se acreditó la calidad por la que comparece al proceso, por lo tanto, no es procedente ningún reconocimiento.

Frente a la **pérdida de oportunidad** reclamada, la parte actora solicita el reconocimiento de 60 SMLMV para cada demandante, no obstante, la parte actora no acredita cuál era la oportunidad que la señora Elena Patricia Acevedo Rivas perdió con las supuestas omisiones del Distrito de Santiago de Cali, de hecho, este título no es desarrollado en la demanda, sino únicamente es mencionando en el acápite de “declaraciones y condenas” y a lo largo del proceso tampoco se acreditó alguna circunstancia relacionada con esta solicitud.

Al respecto, el Consejo de Estado ha definido la pérdida de oportunidad como:

“La pérdida de oportunidad o pérdida de chance alude a todos aquellos eventos en los cuales una persona se encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta éste que genera, por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido, o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente en que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja patrimonial. (...)

La pérdida de oportunidad constituye, **entonces, una particular modalidad de daño caracterizada porque en ella coexisten un elemento de certeza y otro de incertidumbre: la certeza de que en caso de no haber mediado el hecho dañino el damnificado habría conservado la esperanza de obtener en el futuro una ganancia o de evitar una pérdida para su patrimonio y la incertidumbre, definitiva ya, en torno de si habiéndose mantenido la situación fáctica y/o jurídica que constituía presupuesto de la oportunidad, realmente la ganancia se habría obtenido o la pérdida se hubiere evitado.**¹² (Negrilla y subrayado fuera

12 Sentencia del 11 de agosto de 2010. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Radicación No. 05001-23-26-000-1995-00082-01(18593).

del texto).

En este sentido, la pérdida de oportunidad permite que exista un grado de incertidumbre, lo cual, permite que la carga probatoria de la parte actora sea un poco laxa, sin embargo, requiere un elemento de certeza, y es que se acredite que el hecho dañino o la omisión disminuyó la oportunidad de la víctima de evitar el daño, para ello, es necesario demostrar que la causa eficiente del daño fue la omisión por parte de la accionada.

Para el caso concreto, dicho requisito se traduce en que los demandantes deben demostrar que la causa eficiente del accidente fue el hueco en la vía, lo cual, no fue acreditado, pues la parte actora no probó las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente, pues solo aportó el IPAT del caso, cual no es una prueba por sí solo de dichos. Aunado lo anterior, era necesario acreditar de manera científica cuál era la posibilidad real que tenía la señora Elena Patricia Acevedo Rivas de no sufrir el accidente.

Siendo así, es evidente que la parte actora no acredita ninguno de los elementos, por lo que, es claro que su petición de pérdida de oportunidad se justifica en su imposibilidad de demostrar el nexo de causalidad y, por ende, busca que su carga probatoria sea disminuida. Al respecto, el Consejo de Estado ya se ha pronunciado, en el sentido que dicha figura no puede constituirse en un mecanismo para salvarse de probar la relación de causalidad, pues ante la imposibilidad de hacerlo, lo que procede es la exoneración de la responsabilidad:

“La noción de pérdida de oportunidad no puede constituirse en un mecanismo que posibilite la declaración de responsabilidad del demandado en ausencia de acreditación del vínculo causal entre el hecho dañino y la ventaja inexorablemente frustrada o el detrimento indefectiblemente sufrido por la víctima, de suerte que se condene —con apoyo en la figura en cuestión— a reparar la totalidad del provecho que ya no podrá obtenerse por el perjudicado a pesar de no haber sido establecida la causalidad.

El concepto de pérdida de oportunidad implica que se demuestre la relación causal existente entre el acontecimiento o la conducta dañosa y la desaparición, exclusivamente, de la probabilidad de acceder a la ganancia o de evitar el deterioro como rubros que se integran efectivamente en el patrimonio del afectado, con independencia de los demás tipos de daño cuya ocurrencia pudiere tener lugar; la pérdida de oportunidad no representa, por tanto, una especie de daño subsidiario en defecto de prueba respecto de la relación causal entre el hecho o conducta censurados y el beneficio definitivamente perdido, sino una clase autónoma de daño respecto del cual no puede presentarse la tantas veces mencionada incertidumbre causal, toda vez que tal falta de certeza debería conducir, directa e indudablemente, a la exoneración de responsabilidad por el anotado concepto; de allí que resulte atinado aseverar que “cuando hablamos de la pérdida de una oportunidad, no podemos incluir allí la simple imposibilidad de saber cuál es la causa de un daño.”¹³

En este sentido, el despacho no podrá reconocer el perjuicio de pérdida de oportunidad en cuanto la parte demandante no ha acreditado los elementos necesarios para ello, tal como es demostrar la relación de causalidad entre la omisión del Distrito de Santiago de Cali y la desaparición de la pérdida de oportunidad. Además, es preciso que el despacho reconozca que este tipo de perjuicio es reconocido cuando la persona fallece o en los casos de responsabilidad médica, lo cual, no es el caso, por lo que la presente excepción se encuentra debidamente acreditada.

3. FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En el hipotético y remoto evento en el que se considere que el despacho acceda a las infundadas

¹³ Sentencia del 11 de agosto de 2010. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Radicación No. 05001-23-26-000-1995-00082-01(18593).

pretensiones de la demanda, ruego tener en cuenta las siguientes excepciones acreditadas en el asunto:

3.1 SE ACREDITÓ LA INEXISTENCIA DE PRETENSIONES DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FRENTE A MI REPRESENTADA

Verificado el escrito de llamamiento en garantía se evidencia que, en el mismo, no se encuentra consignada una sola pretensión declaratoria o condenatoria en contra de la aseguradora que aquí represento, por lo que no hay lugar al reconocimiento de pretensiones que claramente no fueron solicitadas en la oportunidad procesal correspondiente.

En ese sentido, es necesario señalar que el principio de congruencia es la regla del derecho procesal, en virtud de la cual el Juez se encuentra obligado a que sus decisiones sean concordantes con los hechos y pretensiones que se presentan en los escritos que se elevan ante los despachos. El artículo 281 del Código General del Proceso, contempla los preceptos que debe seguir el Juez en sus sentencias, de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIA. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.” (Negrilla y subrayado fuera del texto).

En virtud de lo anterior, es factible concluir que: i) no es válido emitir fallos ultra petita, es decir, sentencias en las cuales se condene al demandando por una cantidad superior a la solicitada en el líbello de la demanda, o sentencias que concedan más de lo pedido; ii) tampoco se pueden emitir fallos extra petita, es decir, sentencias en las cuales se condene al demandado con base en pretensiones distintas a las deprecadas en la demanda y iii) no pueden ser proferidas sentencias por causas distintas a las invocadas en el petitum de la demanda. En cuanto a la importancia del principio de congruencia, la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha definido el principio de congruencia **“como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó.** Además, ha establecido que siempre que exista falta de congruencia en un fallo se configurará un defecto y, por tanto, será procedente la tutela contra providencia judicial con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso. (...)”

24.2. De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que **el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita),** pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. **El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello.**¹² (Negrilla y subrayado fuera del texto)

En este orden de ideas, resulta incuestionable que la juez, al momento de fallar, no podrá desbordarse de las pretensiones propuestas, porque la sentencia que resuelva la demanda y la relación sustancial de las llamadas en garantía deberá estar sometida al principio de congruencia. Por otro lado, se evidencia en el escrito del llamamiento que el mismo no contiene pretensiones formuladas en contra de la compañía de seguros que represento, desconociendo lo estipulado en el artículo 162 del Código de la Ley 1437 del 2011, razón por la cual, el operador judicial no podrá ordenar el pago de suma alguna en cabeza de compañía, cuando es claro que el llamante en garantía en ningún momento solicitó la afectación de la póliza de seguro emitida por mi representada.

Siendo así, se evidencia como en el presente asunto la parte no siguió los lineamientos dispuestos en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para la presentación del llamamiento en garantía, pues ni siquiera planteó pretensiones en el escrito. Es por ello que, bajo el principio de congruencia, al operador judicial no le es dable en el contenido de la sentencia ordenar la afectación de la póliza de seguro expedida por mi representada.

En consecuencia, la juez no podrá pronunciarse o decidir más allá de lo consignado en las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía, y de la lectura de estos documentos, se denota que la parte llamante no solicitó la afectación de la póliza en mención, por lo que no procederá reconocimiento de emolumento alguno. Sin perjuicio de lo anterior, y sin que implique la aceptación de la responsabilidad, me opongo rotundamente a cualquier condena en contra de mi procurada en razón a que no le asiste la obligación indemnizatoria derivada de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507223000670 en cuanto no se ha materializado el riesgo asegurado.

3.2 FALTA DE COBERTURA MATERIAL POR LA OCURRENCIA DE LAS EXCLUSIONES PACTADAS EN LA PÓLIZA DE SEGURO NO. 1507223000670

Sin perjuicio de lo anterior, en el remoto e hipotético caso que se considere la existencia de responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali al considerar la causa eficiente del accidente fue la presencia de un hueco en la Calle 16 entre carrera 79 y 80 de la ciudad de Cali, esta declaración implícitamente conlleva a determinar que el ente territorial incumplió el deber legal que le asiste de velar por la conservación y el sostenimiento de las vías públicas a su cargo, y en ese sentido, deberá tenerse en cuenta que esta situación se encuentra expresamente excluida del contrato de seguros, la cual se encuentra en el condicionado general de la Póliza 1507223000670, razón por la cual no podrá bajo ningún argumento fáctico o jurídico afectar el contrato de seguro anteriormente comentado.

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del contrato de seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro”¹⁴.

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los contratos de seguro. Razón por la cual, es menester señalar que en el condicionado general de la Póliza 1507223000670, en el numeral 20 del acápite de CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES – II. EXCLUSIONES, se encuentran los daños derivados de la inobservancia de

¹⁴ Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020.

disposiciones legales y de la autoridad o de instrucciones y estipulaciones contractuales.

II. EXCLUSIONES

LA COBERTURA DE ESTA PÓLIZA EN NINGÚN CASO AMPARA NI SE REFIERE A RECLAMACIONES QUE SEAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CONSECUENCIA DE:

(...)

20. DAÑOS A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES Y DE LA AUTORIDAD O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.

De conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, al Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Por lo tanto, la Ley 715 de 2001 por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, consagra en su artículo 76 lo siguiente:

76.4. En materia de transporte.

76.4.1. **Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio**, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente (...). (negrilla y subrayado por fuera del texto original).

Así mismo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 74 del Decreto 0077 del 15 de enero de 1987- Por el cual se expide el Estatuto de Descentralización en beneficio de los municipios. -

“El Fondo Vial Nacional no podrá construir o conservar vías dentro del perímetro urbano de los municipios que sean capitales de departamento ni en el Distrito Especial de Bogotá. Los contratos que en la actualidad se encuentren perfeccionados se ejecutarán hasta su terminación, **pero la conservación y mantenimiento de tales obras estará a cargo de la respectiva entidad territorial**”. (negrilla y subrayada por fuera del texto original).

Y en la misma línea, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que **“los municipios tienen atribuida la función legal y reglamentaria de velar por la conservación y el sostenimiento de las vías públicas destinadas a la circulación de personas, vehículos o cosas, en particular si se trata de elementos que hacen parte de las redes de acueducto y alcantarillado.”**¹⁵

En conclusión, es deber de los municipios mantener en buenas condiciones las vías municipales y, en el caso concreto, al Municipio de Santiago de Cali le corresponde efectuar las obras que demande el progreso local y que claramente incluye no solamente su construcción sino su mantenimiento en toda la infraestructura vial.

En ese sentido, como se ha venido desarrollando, el daño pretendido por la parte demandante se refiere a lo ocurrido en un accidente de tránsito ocurrido el 12 de abril de 2023 cuando la señora Elena Acevedo conducía su motocicleta de placas HSR20D por la calle 16 entre carrera 79 y 80 en sentido sur - norte de la ciudad de Cali, el cual atribuyó a la presencia de un hueco que se encontraba en la vía y la falta de señalización. En ese sentido, en caso de que se estructurara la acción a partir de este daño y se atribuyera

¹⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 17001233100020000018801 (31002), mar. 27/14, C.A.P. Ramiro Pazos Guerrero

remota e hipotéticamente al Distrito Especial de Santiago de Cali la responsabilidad por alguna acción u omisión de sus deberes legales frente al mantenimiento o señalización de la vía en comento, esta situación está expresamente excluida del contrato de seguro, bajo las premisas anteriormente citadas, por lo que lo que esta deberá ser aplicada y deberá dársele los efectos señalados por la jurisprudencia, el cual sin duda es, desvincular a la compañía del presente asunto al no existir cobertura material en el contrato de seguros. En consecuencia, no podrá existir responsabilidad en cabeza del Asegurador como quiera que se convino libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado.

3.3 SE ACREDITÓ LA INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA AL NO REALIZARSE EL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA

Es preciso informar al despacho, que en el presente caso no asiste ninguna obligación indemnizatoria a cargo de CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. respecto de la Póliza de Seguro No. 1507223000670, por cuanto no se ha realizado el riesgo asegurado amparado en el contrato de seguro.

En este sentido, el contrato de seguro solo entrará a operar sí y solo sí, el asegurado (Distrito de Santiago de Cali) es declarado patrimonialmente responsable por los presuntos daños que alega la parte demandante, siempre y cuando no se presente una causal de exclusión u otra circunstancia que impida los efectos jurídicos del contrato de seguro. Es así, como la declaratoria de responsabilidad civil constituirá el siniestro, esto es, la realización del riesgo asegurado (artículo 1072 del Código de Comercio).

En relación, el objeto pactado en la Póliza de Seguro fue el siguiente:

1. Objeto del Seguro

Amparar los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales incluyendo los perjuicios morales y de vida en relación y el lucro cesante, que cause a terceros el asegurado, con motivo de la responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con la Ley colombiana, durante el giro normal de sus actividades.

Al respecto, la parte demandante demostró los elementos constitutivos de la responsabilidad en cabeza del Distrito de Santiago de Cali, pues es claro que: i) no acreditó que la causa eficiente del accidente haya sido la supuesta existencia del hueco en la vía y ii) existen varios elementos que permiten inferir que la señora Elena Patricia Acevedo Rivas fue el causante de su propio accidente, toda vez que incumplió las normas de tránsito al conducir sin licencia de tránsito, conducir por el carril incorrecto y a una velocidad mayor a la permitida en las zonas residenciales.

Por lo anterior, en razón a que no se ha demostrado la responsabilidad del Distrito de Santiago de Cali en la causación del daño y que, en todo caso, existe una causal de exoneración de la responsabilidad, solicito señor juez se declare probada esta excepción en cuanto no le asiste ninguna obligación a la compañía aseguradora toda vez que no se ha realizado el riesgo asegurado.

3.4 EVENTUAL OBLIGACIÓN DE MI PROCURADA NO PUEDE EXCEDER EL COASEGURO PACTADO EN LA PÓLIZA / INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD

Ahora, sin que implique la aceptación de la responsabilidad por parte de mi representada, es necesario precisar que, si llegará a existir una condena en contra de la compañía aseguradora, el despacho debe tener en cuenta que los riesgos fueron distribuidos entre diferentes aseguradoras, así:

Compañía aseguradora	Porcentaje de participación
SBS Seguros Colombia S.A.	20%
Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.	22%
Chubb Seguros Colombia S.A.	28%
Mapfre Seguros Generales de Colombia	30%

En ese sentido, existiendo la distribución el riesgo entre las compañías de seguros, debe tenerse en cuenta que en el hipotético caso en que se demuestre una obligación de indemnizar en virtud del contrato de seguro, la responsabilidad de cada una de las aseguradoras está limitada al porcentaje antes señalado, pues no se puede predicar una solidaridad entre ellas.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 1092 del Código de Comercio, el cual sostiene: *“en el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, **los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos**, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad”*.

Lo estipulado en la norma en cita, se aplica al coaseguro por estipulación expresa del artículo 1095 del Código de Comercio, que establece lo siguiente: *“las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro, **en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro”***.

Es así como las obligaciones que asumen las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una de ellas y no existe solidaridad legal ni contractual entre ellas. Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 9 de julio de 2021 con radicación No. 08001-23-33-000-2013-00227-01 (54460) estableció:

(...) 18.1.- En atención al coaseguro existente, se precisa que la llamada en garantía reembolsará únicamente el 55% de lo que llegue a pagar el Municipio de Santiago de Cali, pues, en estos eventos, **los distintos aseguradores deben responder con sujeción a la participación que asumieron al momento de la celebración del contrato sin que exista solidaridad** de conformidad con el artículo 1092 del Código de Comercio: **La jurisprudencia ha reconocido que en estos casos de coaseguro se responde en proporción a la cuantía que se asumió, sobre todo en el caso en que ello se pacte expresamente**¹⁶ (Negrilla y subrayado fuera del texto).

En consecuencia, al momento de resolver lo concerniente a mi procurada y en el hipotético caso en que se demuestre una obligación de indemnizar a su cargo, deberá tenerse en cuenta que la póliza de seguro antes referida fue tomada en coaseguro. En virtud de lo anterior, es claro que mí procurada y las aseguradoras citadas, acordaron distribuirse el riesgo según los porcentajes señalados, sin que pueda predicarse una solidaridad entre ellas y limitándose la responsabilidad de estas en proporción con el porcentaje del riesgo asumido.

Ahora bien, es preciso indicarle al despacho que entre las coaseguradoras no existe solidaridad en la acreencia eventual por pasiva, así lo ha entendido el Consejo de Estado en Sentencia del 26 de enero del 2022, en la que afirmó:

¹⁶ Sentencia del 9 de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Martín Bermúdez Muñoz. Radicación: 08001-23-33-000-2013-00227-01 (54460).

“Es claro para la Sala que **las obligaciones que asumen las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una de ellas y no existe en este caso solidaridad legal ni contractual entre ellas**, de modo que la contratista violó el debido proceso a Segurexpo SA al negar la vinculación del coasegurador Colpatria SA al trámite administrativo e imponerle, sin fundamento jurídico admisible, la carga de responder por la obligación de un tercero que no fue citado al proceso y que, en tal virtud, carece de interés para cuestionar los actos administrativos objeto de control, con todo, como lo estimó el tribunal, ello solo otorga derecho a Segurexpo S.A. para reclamar la nulidad parcial del acto, precisamente porque las obligaciones no eran solidarias y bien podía reclamársele su parte sin la comparecencia del coasegurador”.¹⁷ (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Es claro que mi representada y las aseguradoras citadas, acordaron distribuirse el riesgo según los porcentajes señalados, sin que pueda predicarse una solidaridad entre ellas y limitándose la responsabilidad de estas en proporción con el porcentaje del riesgo asumido.

En virtud de lo anterior, solicito se tenga en cuenta la participación del 28% asumida por Chubb Seguros Colombia S.A.

3.5 LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA NO PUEDE EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA

Sin que implique el reconocimiento de la responsabilidad, es necesario que el Juez observe las condiciones particulares y generales de la Póliza de Seguro No. 1507223000670, dado que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, que establece que el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 del mismo Código, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Para el caso concreto, el límite del valor asegurado pactado en la póliza para los casos de responsabilidad civil extracontractual es de \$5.000.000.000 pesos m/cte.

COBERTURAS		VALOR ASEGURADO	
P.L.O.: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 5.000.000.000,00	\$	5.000.000.000,00
Responsabilidad Civil patronal	\$ 2.100.000.000,00	\$	3.500.000.000,00
Gastos medicos y hospitalarios	\$ 500.000.000,00	\$	2.500.000.000,00
Responsabilidad Civil parqueaderos	\$ 2.000.000.000,00	\$	3.000.000.000,00
Responsabilidad Civil para contratistas y subcontratistas	\$ 5.000.000.000,00	\$	5.000.000.000,00
Responsabilidad Civil Vehiculos propios y no propios	\$ 2.500.000.000,00	\$	2.500.000.000,00
Responsabilidad Civil productos	\$ 3.500.000.000,00	\$	3.500.000.000,00
Responsabilidad Civil cruzada	\$ 5.000.000.000,00	\$	5.000.000.000,00

Dicho valor de \$ 5.000.000.000 pesos m/cte. se encuentra sujeto a la disponibilidad de la suma asegurada, dado que la ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando la suma asegurada, por lo que, es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de mi representada.

¹⁷ Sentencia del 26 de enero de 2022. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, M.P. Freddy Ibarra Martínez. Radicación No. 25000232600020110122201 (50.698).

En todo caso, se reitera, que las obligaciones de la aseguradora están estrictamente sujetas a estas condiciones claramente definidas en la póliza, con sujeción a los límites asegurados y a la fehaciente demostración, por parte del asegurado en este caso, del real y efectivo acaecimiento del evento asegurado.

Por lo anterior, señor juez solicito se declare probada esta excepción.

3.6 EL DESPACHO NO PODRÁ DESCONOCER LA EXISTENCIA DE UN DEDUCIBLE PACTADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Es preciso informar al despacho, sin que constituya reconocimiento de responsabilidad alguna por parte de los asegurados, es pertinente recordar que, en el improbable caso que se decidiera afectar el contrato de seguro expedido por mi procurada, en el mismo se pactó un deducible, el cual se traduce en una porción del siniestro que en todo caso debe ser asumido por cuenta propia del asegurado, es decir, por el Distrito de Santiago de Cali.

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE
P.L.O.: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 5.000.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil patronal	\$ 2.100.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Gastos medicos y hospitalarios	\$ 500.000.000,00	NO APLICA
Responsabilidad Civil parqueaderos	\$ 2.000.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil para contratistas y subcontratistas	\$ 5.000.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil Vehiculos propios y no propios	\$ 2.500.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil productos	\$ 3.500.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil cruzada	\$ 5.000.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)

Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia frente al tema del deducible ha dicho:

“Dicho esto, en una póliza donde se ampara la responsabilidad civil extracontractual el monto de la indemnización puede verse disminuido si las partes han pactado que un porcentaje de la pérdida se asumirá a título de deducible por el asegurado, convenio que resulta legalmente viable, de acuerdo con nuestro ordenamiento mercantil.

En efecto, la Sección I del Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio, en su artículo 1103, consagra dentro de los principios comunes a los seguros de daños la posibilidad de pactar, mediante cláusulas especiales, que el asegurado “...deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño”.

Una de tales modalidades, la denominada deducible, se traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.

Por tanto, el valor del ofrecimiento extendido por la compañía aseguradora podría variar en función de los perjuicios sufridos por el reclamante, así como los elementos probatorios que se hubieren allegado para acreditar el valor de la pérdida, conforme lo presupuestado en el artículo 1077 del código de comercio, aunado a las condiciones generales y particulares pactadas en la póliza, como lo son el límite del valor asegurado, el deducible pactado con el asegurado, entre otros factores.”¹⁸ (Negrilla y Subrayado fuera del texto)

De esta manera, en la Póliza de Seguro No. 1507223000670 se pactó un deducible para el amparo de la responsabilidad civil extracontractual, el cual es el 5% del valor de la pérdida - mínimo 2 SMMLV, por lo

¹⁸ Concepto 2019098264 ago. 29/2019, Superintendencia Financiera de Colombia.

que, al momento de proferir una eventual sentencia condenatoria en contra del asegurado y optarse por afectar el contrato de seguro, deberá tenerse en cuenta el deducible pactado.

3.7 EN TODO CASO DEBERÁ TENERSE EN CUENTA LA INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE EL DEMANDADO Y LA ASEGURADORA

Frente a esta excepción es preciso afirmar que la solidaridad surge exclusivamente cuando la ley o la convención la establecen, en el caso en concreto, la fuente de las obligaciones de mi representada está contenida en el contrato de seguro, y en este, no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Es importante insistir sobre el particular por cuanto la obligación de mí representada tiene su génesis en un contrato de seguro celebrado dentro de unos parámetros y límites propios de la autonomía de la voluntad privada y no de la existencia de la responsabilidad civil extracontractual propia de la aseguradora, sino de la que se pudiere atribuir al asegurado conforme a lo establecido por el artículo 2341 del Código Civil, por tanto, nos encontramos frente a dos responsabilidades diferentes a saber:

- i) La del asegurado por la responsabilidad civil extracontractual que se le llegará a atribuir, cuya fuente de obligación indemnizatoria emana de la ley.
- ii) La de mi representada aseguradora cuyas obligaciones no emanan de la ley propiamente, sino de la existencia de un contrato de seguro celebrado dentro de los parámetros dados por los artículos 1036 del Código de Comercio y S.S., encontrándose las obligaciones de mí representada debidamente delimitadas por las condiciones pactadas en el contrato de seguro celebrado; constituyéndose entonces las obligaciones del asegurado y de la aseguradora en obligaciones independientes y que no son solidarias.

La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, mediante sentencia SC20950-2017¹⁹ ha indicado que: *“la compañía aseguradora no está llamada a responder de forma solidaria por la condena impuesta, sino atendiendo que «el deber de indemnizar se deriva de una relación contractual, que favoreció la acción directa por parte del demandante en los términos del artículo 1134 del C. de Co.»*

Por lo anterior, es preciso indicar que la solidaridad de las obligaciones en Colombia solo se origina por pacto expreso entre las partes del contrato, de conformidad con el artículo 1568 del Código Civil que establece:

“ARTICULO 1568. <DEFINICION DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS>. En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece

¹⁹ Sentencia SC-20950-2017. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Radicación No. 05001-31- 03-005-2008- 00497-01.

la ley.” (Negrilla y Subrayado fuera del texto)

En virtud de tal independencia en las obligaciones, se formula esta excepción por cuanto el artículo 1044 del Código de Comercio faculta a la aseguradora a proponer al tercero beneficiario las excepciones y exclusiones que pudiere interponerle al asegurado o tomador del contrato de seguro, motivo por el cual, puede alegar mi representada la ausencia de cobertura ante la falta de prueba de la ocurrencia, cuantía del siniestro, las exclusiones y demás condiciones que resultaren atribuibles al presente evento.

En consecuencia, debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite y sublímite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado.

3.8 DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos, dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada.

3.9 CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Un principio que rige el contrato de seguro de daños es el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. Siendo así, la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado.

Por lo anterior, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el beneficiario con el pago de la indemnización.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia No. 5065 del 22 de julio de 1999 estableció:

Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación

de solución o pago inmediato.²⁰ (Negrilla y subrayado fuera del texto).

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio establece lo siguiente: ***“respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”***.

Así las cosas, no debe perderse de vista que las pretensiones de la parte actora no son de recibo por cuanto su reconocimiento implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo un pago por parte del asegurado que no tiene origen en una obligación legal o contractual.

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el petitum de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual y eventualmente enriqueciendo a la parte actora.

3.10 PAGO POR REEMBOLSO

Sin que el planteamiento de esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada, se solicita al honorable operador judicial que, en el improbable caso de encontrar responsable al asegurado y de llegarse a establecer que ha surgido alguna obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora, respetuosamente se manifiesta que la obligación de mi representada deberá imponerse por reembolso y no por pago directo a los demandantes, ya que es el asegurado quien debe decidir si afecta o no el seguro, quedándole la opción de realizar el pago directo de la hipotética condena. Así las cosas, se solicita que en el remoto caso de condena la misma no sea a través de pago directo, sino por reembolso o reintegro.

V. SOLICITUD

De conformidad con lo expuesto en precedencia, solicito al Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Cali:

PRIMERO: Se sirva **DENEGAR** la totalidad de las pretensiones de la demanda incoada por la señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS Y OTROS ante la inexistencia de los elementos necesarios para declarar la responsabilidad extracontractual de la demandada en el proceso de la referencia.

SEGUNDO: De manera subsidiaria, y en el remoto e hipotético caso que se considere acceder a las pretensiones de la demanda, ruego que se tome en consideración todas y cada una de las excepciones y argumentos planteados desde la contestación de la demanda y el llamamiento en garantía y por ende se

²⁰ Sentencia No. 5065. (22 de julio de 1999). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. M.P. Nicolás Becerra Simancas.

declare la inexistencia de la obligación legal o contractual alguna en cabeza de la aseguradora líder o de las demás coaseguradoras de asumir las consecuencias de una eventual sentencia proferida por este despacho. Además, que no pierda de vista, las exclusiones, el valor del límite asegurado, sublímites, coaseguros, deducibles.

TERCERO: Así mismo, de manera subsidiaria, y en el remoto e hipotético caso de encontrar responsable al asegurado y de llegarse a establecer que ha surgido alguna remota obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora, respetuosamente solicito imponerse por reembolso y no por pago directo a los demandantes.

No siendo otro el motivo de la presente,

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.